

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 21 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-13701-2020
CARATULADO	: FISCO DE CHILE/COMUNIDAD EDIFICIO
TEMPUS I	

Santiago, treinta de Agosto de dos mil veintiuno
VISTOS:

Con fecha 03 de septiembre de 2020, mediante presentación ingresada a través de la oficina judicial virtual, y rectificación de 20 de enero de 2021 a folio 7, comparecen doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación legal del Fisco de Chile, Corporación de derecho público, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687 de la comuna de Santiago, quien asumiendo la representación del Fisco de Chile - Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, órgano de la Administración centralizada del Estado que carece de personalidad jurídica propia, deduce demanda ejecutiva en contra de **Comunidad Edificio Tempus 1**, representada legalmente por don Alejandro Leal Salinas, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Las Nieves N° 3420, comuna de Vitacura, solicitando se despache en su contra mandamiento de ejecución y embargo por la cantidad de 200 U.T.M., equivalentes a la fecha de interposición de la demanda a la suma de \$10.064.400.-, más intereses corrientes y costas.

Funda su demanda en que por sentencia N° 4877 de fecha 12 de julio de 2018, pronunciada por doña Rosa Oyarce Suazo, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, se aplicó a Comunidad Edificio Tempus 1 una multa de 200 U.T.M. (doscientas unidades tributarias mensuales), la que se encuentra ejecutoriada, según consta en certificado de 15 de enero de 2020, emanado de don Gabriel Antivilo Bruna, quien fue designado como Ministro de Fe del Departamento Jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, según Resolución Exenta N° 486, de 20 de abril de 2016, suma adeudada por la demandada, en virtud de la Ley N° 20.724 que modificó el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos, de fecha 14 de febrero de 2014, reemplazando el inciso 2º del artículo 174 del Código Sanitario, que establece que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán merito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que la obligación es líquida, actualmente exigible y s acción no se encuentra prescrita, por lo que, previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de la Comunidad Edificio Tempus



«RIT»

Foja: 1

ly ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de 200 U.T.M., equivalentes a la fecha de interposición de la demanda a \$10.064.400.-, conforme al valor de la UTM correspondiente al mes de septiembre de 2020 (\$50.322.-); más los intereses corrientes que se devenguen desde la fecha del requerimiento de pago y hasta el pago efectivo, disponiendo se siga adelante con la ejecución hasta el total y cumplido pago de lo adeudado, con costas.

Con fecha 09 de julio de 2021, por actuación receptorial de folio 19, se notificó la demanda ejecutiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; y a folio 2 del cuaderno de apremio consta haberse efectuado el requerimiento de pago en rebeldía de la demandada, con fecha 15 de julio de 2021.

Por presentación de 21 de julio de 2021 a folio 20, comparece don Alejandro Rafael Leal Salinas, empresario, en calidad de Presidente del Comité de Administración de la Comunidad Edificio Tempus I, debidamente representado, y opone las excepciones contempladas en los números 4, 7 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, fundando la ineptitud de libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254, contemplada en el numeral 4 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, en que se ha infringido el numeral 3 del señalado artículo 254, puesto que en la demanda no se ha señalado de forma correcta su nombre, que es Alejandro Rafael Leal Salinas y no Alejandro Leal Salinas; y asimismo no se señala cuál es su profesión u oficio, en circunstancias que la ejecutante sabe perfectamente estos antecedentes, pues ellos constan en la escritura pública de fecha 8 de octubre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, a la cual se redujo acta de sesión del Comité de Administración de la Comunidad, celebrada el 4 de octubre de 2018, por la cual se le designó como presidente del Comité de administración del Edificio, acta que dejó sin efecto la designación anterior de don Juan Poblete, quien fuera emplazado en el sumario sanitario que da origen al título ejecutivo.

Agrega que la única forma en la cual la actora pudo haberse enterado de su designación como presidente del Comité de administración de la “Comunidad del Edificio Tempus I” es por haber tenido acceso a la referida escritura pública, la que su parte ha acompañado en los autos Rol C-30129-2018, ventilada ante el 1º Juzgado civil de Santiago, en el que se reclamó en de la sentencia que sirve de título ejecutivo.

En relación a la excepción del número 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, menciona que



Foja: 1

el artículo 437 del Código de Procedimiento Civil requiere que la obligación contenida en el título sea actualmente exigible, requisito que no se cumple en el caso sub lite, pues se ha producido el decaimiento del acto administrativo sancionatorio por haber transcurrido el plazo dentro del cual la ley ha determinado que debe iniciarse el proceso administrativo y quedar a firme para que produzca la eficacia que la ley prevé, aludiendo a jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que ha sostenido que, si bien se trata de un instituto que no se encuentra expresamente previsto en el ordenamiento jurídico –pero consagrado por la doctrina y la jurisprudencia del Máximo Tribunal– su raigambre se halla en el principio constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, el cual ha de ser observado por todos los Órganos del Estado, resultando menoscabada dicha institución si la Administración retrasa o demora injustificadamente la tramitación o conclusión de los procedimientos puestos a su cargo, todo ello en relación con la interpretación armónica de las reglas establecidas en los artículos 3° inc. 2°, 5° inc. 1° y 11 de la Ley 18.575 con los principios generales consagrados en la Ley 19.880, señalándose por vía ejemplar, los artículos 7° y 8° de la Ley N° 19.880, donde se establecen respectivamente los principios de celeridad y de conclusividad.

Añade que en la búsqueda de un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo, la Corte ha considerado como referencia los plazos que el derecho administrativo contempla para situaciones que puedan asimilarse, señalándose en tal sentido que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, inciso primero de la Ley N° 19.880, el plazo que tiene la Administración para invalidar sus actos es de dos años, de lo que resulta válido sostener que si la Administración deja transcurrir, de forma injustificada, un lapso superior entre el inicio y término del procedimiento, se produce el decaimiento del procedimiento administrativo y la consecuente extinción del acto administrativo sancionatorio, perdiendo por lo tanto su eficacia, pues tal demora en la decisión afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo y lesivo para los intereses del afectado, quien, al estar sujeto a un procedimiento excesivamente extenso, ve afectado su derecho a la seguridad jurídica.

Continúa citando el artículo 174 del Código Sanitario que establece que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, norma que en su número 1 considera a la sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria, debiendo ello relacionarse con la norma del artículo 174 del mismo cuerpo legal.



Foja: 1

Así –explica- la sentencia que sirve de fundamento a este juicio fue dictada el 12 de julio de 2018, notificada a su parte el 20 de septiembre de 2019, mientras que la certificación de ejecutoria se realizó el 15 de enero de 2020 y, finalmente, la demanda se presentó a distribución, el 3 de septiembre de 2020, por lo que han transcurrido más de dos años desde que se inició el proceso, según la propia sentencia condenatoria, el año 2017 y hasta el 15 de enero de 2020 fecha en la cual la sentencia se considera firme para efectos de su cumplimiento, haciendo presente que contra cualquier noción de certeza jurídica que en definitiva, la autoridad sancionatoria mantenga abierta en forma indefinida la posibilidad de ejecutar el acto administrativo en cuestión, por la vía de retardar en forma injustificada el trámite de certificación de ejecutoria de la sentencia, práctica que sólo puede ser contrarrestada por la vía de aplicar el instituto del decaimiento del acto administrativo.

Finalmente opone la excepción de la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva del artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil, la que funda en que la sentencia que sirve de título a este juicio fue dictada el 12 de julio de 2018, notificada a esta parte el 20 de septiembre de 2019. En tanto, la certificación de ejecutoria se realizó el 15 de enero de 2020 y, finalmente, la demanda se presentó a distribución, el 3 de septiembre de 2020, existiendo múltiple jurisprudencia en torno a que la obligación demandada al pago de una multa sancionatoria, debe aplicarse a la misma la regla de prescripción establecida en el artículo 94 del Código Penal respecto de las faltas, el cual se encuentra establecidos en 6 meses desde la resolución que impone la sanción.

Con fecha 28 de julio de 2021 a folio 23, la ejecutante, evacuó el traslado y solicitó el rechazo de las excepciones opuestas, con costas, alegando que la excepción de ineptitud del libelo se basa en la falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, exigiéndose una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, cuestión que se estima incumplido por haberse señalado incorrectamente el nombre y profesión u oficio del demandado, lo que resulta errado, ya que el libelo, rectificado por escrito de 21 de enero de 2021, individualiza correctamente al representante legal de la ejecutada, don Alejandro Leal Salinas, Rut 12.138.758-1, resultando irrelevante no haber señalado su segundo nombre “Rafael”, al no existir norma alguna que obligue a señalar todos los nombres del demandado, sino que el número 3° del art. 254 del Código de Procedimiento Civil señala expresamente: “3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado”; y en cuanto a la omisión de la profesión de oficio del representante legal de la demandada, ello tampoco ocurre, pues se indicó en la demanda que ello se ignoraba, pues su parte no puede dar fe de hechos que no le constan por medios fehacientes.



Seguidamente, en cuanto a la excepción de la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, la misma se funda en que supuestamente desde que se inició el procedimiento en el año 2017, hasta el 15 de enero de 2020, fecha en que la sentencia se considera firme, ha transcurrido el plazo de 2 años, alegación errónea e impertinente, en primer lugar porque la ejecutada intenta subrepticamente atacar por esta vía un acto administrativo ejecutoriado, lo cual no corresponde, puesto que las vías legales para impugnarlo ya caducaron; y en segundo lugar, porque la demandada fue debidamente emplazada en un procedimiento sancionatorio y se le notificó válidamente la sentencia sanitaria dictada, por lo que pudo haberla impugnado o haber reclamado judicialmente de la sentencia (cuya causa de pedir hubiera consistido en obtener la declaración judicial de que se verificó un supuesto “decaimiento del acto administrativo”) ante la Justicia Ordinaria, sin perjuicio de que aún en esos casos, los efectos la sentencia sanitaria no se hubieran suspendido por expresa aplicación del artículo 3° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y lo dispuesto en el artículo 172 del Código Sanitario que establece que “las sentencias que dicte la autoridad sanitaria podrán cumplirse no obstante encontrarse pendiente la reclamación a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de lo que por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria resuelva la justicia ordinaria al pronunciarse sobre aquélla”.

Agrega que también resulta incorrecto aducir que la demanda en autos se sustenta en un título que no tiene mérito ejecutivo, ya que, el fundamento legal para que la sentencia sanitaria tenga esta calidad es el número 7 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, pues el artículo 174 inciso segundo del Código Sanitario, reformado por la Ley N°20.724, establece que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Indica que los actos administrativos formales que imponen sanciones causan inmediata ejecutoriedad, lo cual se explica por la naturaleza jurídica del acto que impuso la multa, que tiene la capacidad de generar una obligación de pago en el patrimonio del sancionado, de conformidad con el artículo 51 de la Ley N° 19.880, como lo ha refrendado la Excma. Corte Suprema en el fallo dictado en los autos Rol 1079-2014, en el que se discutía lo sucedido con una multa impuesta en un procedimiento administrativo ante el evento de la muerte del sancionado antes de que terminase la reclamación judicial de dicha multa, al señalar que “de esta manera el acto administrativo que aplicó la multa al Sr. Mackenna produjo sus efectos de manera inmediata, esto es, en el acto de su notificación aquél



Foja: 1

pasó a ser deudor de la multa y tal obligación se incorporó a su patrimonio, de lo que se sigue que el cumplimiento de la obligación allí contenida podía –y aún puede– serle exigido a contar del día de su notificación, a menos que la ley disponga la suspensión de la exigibilidad de aquella”; añadiendo la sentencia en el considerando “Undécimo: (...) En consecuencia, todos los actos administrativos -incluidos los sancionatorios, por cierto- producen sus efectos de manera inmediata, sus consecuencias jurídicas y materiales se radican en el patrimonio del administrado desde el momento mismo de su notificación, y, una vez notificado, la Administración puede exigir su cumplimiento, incluso antes de que la persona sancionada reclame de la legalidad del acto, salvo que la ley o el juez suspendan dicha exigibilidad –es decir, su eficacia, en términos de ejecutividad-, pero tal suspensión no dice relación con que los efectos del acto no se producen -esto es, no afecta su ejecutoriedad-, sino que, por el contrario, ellos se encuentran plenamente incorporados en el patrimonio del deudor desde su notificación y permanecen en tanto el juez que conozca de la reclamación no declare la ilegalidad del acto respectivo”.

Añade que en el mismo sentido, el artículo 3° de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, establece que se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, detallando que las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión, agregando el inciso final que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediere una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional, circunstancias que no acontecieron en el caso sub lite.

Por último, en lo relativo a la excepción de la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva, señala que no es efectivo que a las sanciones administrativas le sean aplicables las normas sobre prescripción establecidas en el Código Penal respecto de las faltas, esto es, seis meses, pues con fecha 14 de febrero de 2014, se publicó la Ley N°20.724, que introdujo diversas reformas al Código Sanitario, entre ellas al Título II, referido al sumario sanitario, derogando el artículo 169 del Código Sanitario que establecía que “transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el infractor no hubiere pagado la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada décimo de unidad tributaria mensual que comprenda dicha multa.”



Foja: 1

Y además –continúa- en el Título III, denominado “De las sanciones y medidas sanitarias”, la nueva ley reemplazó el inciso segundo del artículo 174, por el siguiente: “Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”, por lo que desde la fecha de publicación de la Ley, las sentencias administrativas que impongan multas dan lugar a un “juicio de ejecutivo de obligaciones de dar”, al que resulta, consecuentemente, aplicable lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, ampliándose el plazo de prescripción de 6 meses –como era entendido hasta la entrada en vigencia de la aludida ley-, a 3 años, como cualquier acción ejecutiva para la que no se disponga un plazo diferente de prescripción, como es el caso en comento; y ese plazo debe computarse desde el momento en que lo resuelto se encuentre ejecutoriado.

Explica que para entender desde cuándo se encuentra ejecutoriado el acto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 21 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, las resoluciones emitidas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud son actos administrativos, los cuales causan inmediata ejecutoriedad, desde su publicación o notificación, por lo que en el caso de autos y en el marco del sumario N° 4897/2017, se dictó Sentencia sanitaria N° 4877 de fecha 12 de julio de 2018, la cual aplicó una multa de 200 UTM a la Comunidad Edificio Tempus 1, la que fue notificada con fecha 20 de septiembre de 2019 y se encuentra ejecutoriada, según consta de certificado de 15 de enero de 2020, emanado de don Gabriel Antivilo Bruna, quien fue designado como Ministro de Fe del Departamento Jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por lo que habiéndose notificado la demanda con fecha 9 de julio de 2021 dentro de los tres años desde que la obligación se hizo exigible, queda de manifiesto que la excepción debe ser rechazada.

Añade que es necesario tener presente que el propio Código Penal, en su artículo 20 prescribe que no se reputan penas, entre otras medidas, las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinaria o atribuciones gubernativas", estableciendo una clara distinción entre las penas o sanciones penales, y las sanciones meramente administrativas, entre las que se consideran las de carácter disciplinario, aplicadas al interior de la Administración o por los superiores respecto de sus subalternos y las gubernativas, y aquellas referidas a las sanciones impuestas por la autoridad administrativa en uso de sus facultades fiscalizadoras o de control, cuyo es el caso de la multa impuesta, citando jurisprudencia.



«RIT»

Foja: 1

Por resolución de 30 de julio de 2021 a folio 24 se declararon admisibles las excepciones opuestas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil se omitió la recepción de la causa a prueba y se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Consejo de Defensa del Estado, en representación legal del Fisco de Chile, asumiendo a su vez la representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, deduce demanda ejecutiva en contra de Comunidad Edificio Tempus 1, a fin de que pague la cantidad de 200 Unidades Tributarias Mensuales, con ocasión de la multa impuesta por sentencia N° 4877, de fecha 12 de julio de 2018, pronunciada por doña Rosa Oyarce Suazo, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

SEGUNDO: Que el demandado, debidamente representado, opuso las excepciones contempladas en los números 4 y 7 y 17 artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, indicando –en lo medular- que el libelo es inepto pues se ha infringido la disposición del artículo 254 N°3 del Código de Procedimiento Civil; que la obligación no es actualmente exigible por haber operado el instituto del decaimiento del acto administrativo; y que la acción se encuentra prescrita por haber transcurrido un plazo superior a 6 meses establecido en el artículo 94 del Código Penal, conforme los argumentos reseñados en lo expositivo.

TERCERO: Que en cuanto a la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, cabe asentar que para que esta defensa prospere, el requisito que se estima infringido ha de tornar el libelo de demanda oscuro, vago o ininteligible, impidiendo una cabal comprensión del mismo y por tanto la posibilidad de una legítima defensa por parte del ejecutado, situación que no se configura en este caso puesto que de la simple lectura de la demanda que sirve de base a la presente ejecución se puede apreciar una clara y sucinta relación de los hechos que le sirven de fundamento, ratificando lo señalado la circunstancia de que el demandado pudo ejercer su defensa jurídica oponiendo excepciones, de manera que la excepción debe ser rechazada, máxime considerando que la omisión alegada sólo se refiere al segundo nombre del representante de la ejecutada, y que la ejecutante en su demanda menciona la circunstancia de ignorar la profesión u oficio del mismo elementos suficientes para estimar cumplidas las exigencias contempladas en el artículo 254 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Que, en relación a la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, es preciso asentar que la excepción alegada supone la falta de



Foja: 1

alguno de los requisitos para que proceda la acción ejecutiva, sea porque el título no reúne todas las condiciones establecidas por la ley para que se le considere como ejecutivo o porque la deuda no es líquida o actualmente exigible, debiendo lo anterior relacionarse con aquellos preceptos legales que consagran determinadas exigencias para que un título tenga dicha condición.

En este sentido, la ejecutada estima que la obligación no es actualmente exigible (artículo 437 del Código de Procedimiento Civil), por haberse producido el decaimiento del acto administrativo sancionatorio por cuanto desde el inicio del mismo el año 2017, ha transcurrido el plazo dentro del cual la ley ha determinado que debe iniciarse el proceso administrativo y quedar a firme, el que estima es de dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 inciso primero, de la Ley N° 19.880, norma contenida en el Capítulo IV, relativo a la revisión de los actos administrativos y, en particular, a la invalidación.

QUINTO: Que cabe consignar que el presente juicio ejecutivo se funda en la sentencia N° 4877 de fecha 12 de julio de 2018, pronunciada por doña Rosa Oyarce Suazo, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, por la que se aplicó la multa a la ejecutada, con ocasión de un accidente laboral grave ocurrido en sus dependencias; y que la misma se encuentra ejecutoriada, como consta del certificado de 15 de enero de 2020, emanado del Ministro de Fe del Departamento Jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, instrumento que constituye un título ejecutivo de conformidad con la disposición del inciso segundo del artículo 174 del Código Sanitario, que dispone que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Que conforme ha expresado la ejecutada, para la procedencia de la ejecución, se requiere que la obligación sea actualmente exigible, conforme lo expresa el artículo 437 del Código de Procedimiento Civil, esto es, existir al entablarse la demanda ejecutiva y no estar sujeta a ninguna modalidad que suspenda su nacimiento o ejercicio.

Siguiendo este razonamiento, para determinar si la obligación consignada en el título es actualmente exigible no puede obviarse que el artículo 172 del Código Sanitario dispone que las sentencias que dicte la autoridad sanitaria podrán cumplirse no obstante encontrarse pendiente la reclamación a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de lo que por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria resuelva la justicia ordinaria al pronunciarse sobre aquélla; lo que aparece refrendado por el artículo 51 de la Ley N° 19.880 referido a la ejecutoriedad inmediata de los actos de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo.



SÉPTIMO: Que por su parte, el instituto alegado por el demandado, esto es, lo que en doctrina se conoce como decaimiento del acto administrativo, no consiste sólo y únicamente en el mero paso del tiempo (para la cual nuestro ordenamiento jurídico dispone otras vías), sino que se ha entendido como la extinción de un acto administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo.

Mayor amplitud conceptual entrega el voto de prevención dictado por la Excm. Corte Suprema con fecha 09 de septiembre de 2021 en los autos Rol N° 24.455-2020 al señalar: *“Que si bien el decaimiento de los actos de la Administración se produce en el contexto del demérito o pérdida de eficacia primero por desaparición sobreviniente de los presupuestos de hecho que ocasionan la imposibilidad de producir sus efectos, en que la substancia o contenido del acto pierde su eficacia, y en segundo lugar, producto de su falta de legitimidad por antijuricidad del acto también con posterioridad a su dictación, por alteración del ordenamiento jurídico sobre cuya base se dictó y que determina que, en el nuevo escenario, el acto sea ilegal o, a lo menos ilegítima”*.

OCTAVO: Que así, conforme los antecedentes referidos, no se aprecia que en el caso en comento se vislumbre que se hayan producido los supuestos de hecho para operar el decaimiento del acto administrativo por el mero paso del tiempo para el cobro de la multa, sino que por el contrario, es por medio de esta acción que la autoridad busca materializar el cumplimiento de una obligación nacida con ocasión de un sumario administrativo, el que concluyó con la sentencia sanitaria N° 4877 de fecha 12 de julio de 2018, notificada a la demandada el 20 de septiembre de 2019, por lo que trata de una obligación actualmente exigible y ello implica el rechazo de la excepción.

NOVENO: Que en relación a la excepción de prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva, esta se ha fundado en que corresponde aplicar el plazo de 6 meses contemplado en el artículo 97 del Código Penal respecto de las faltas.

DÉCIMO: Que, según lo dispone el artículo 2514 del Código Civil “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”, mientras que, por su parte, el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, preceptúa que este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias.

UNDÉCIMO: Que como ya se explicó a propósito de la excepción de falta de ejecutoriedad, la modificación de la norma del artículo 174 del



«RIT»

Foja: 1

Código Sanitario dispone que las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y con ello ha querido implicar que la acción patrimonial debe someterse al estatuto jurídico del derecho civil, pues si bien la sanción penal y la sanción administrativa son manifestaciones del ius puniendi estatal, no es menos cierto que ambas son independientes y ello no implica *per se* aplicar de manera directa las normas y principios del derecho penal, entendiendo que debe excluirse los efectos de la regulación de los artículos 94 y 97 del Código Penal, debiendo aplicarse las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil, es decir, aquella contemplada en el artículo 2515 del Código Civil.

DUODÉCIMO: Que así las cosas, desde la fecha de dictación de la sentencia sanitaria N° 4877 de fecha 12 de julio de 2018 y la notificación de la demanda ejecutiva de autos el día 09 de julio de 2021, no ha transcurrido el plazo de 3 años, por lo que no cabe sino concluir que la acción ejecutiva no se encuentra prescrita, razón por la cual la excepción en comento deberá ser desestimada.

DÉCIMO TERCERO: Que habiendo sido totalmente vencido el demandado, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 en relación con el artículo 471, ambos del Código de Procedimiento Civil, se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 434, 437, 464 y 471 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1698, 2514 y 2515 del Código Civil; artículos 172 y 174 del Código Sanitario; Ley N° 19.880, y demás normas aplicables, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones contemplada en los N° 4, 7 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por el ejecutado con fecha 21 de julio de 2021 a folio 21, ordenándose seguir adelante con la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago a la actora de su acreencia; y

II.- Que se condena en costas al demandado, por haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

DICTADA POR DOÑA ROCIO PEREZ GAMBOA, JUEZ TITULAR.



«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Agosto de dos mil veintiuno**

